

Haití Lejos del realismo*

Antonin, Arnold

Arnold Antonin: Economista haitiano. Investigador del Centre Petion-Bolivar, Puerto Príncipe. Autor de numerosos estudios sobre la realidad haitiana.

Los haitianos gustan de destacar que su pequeño y singular país ha tenido la primacía en muchos campos: el primer país independiente de América Latina, la primera República negra del mundo, la primera revolución de esclavos triunfante, la más larga ocupación militar norteamericana del mundo, la primera presidencia vitalicio-hereditaria del siglo XX la primera mujer presidente de América, el primer cura católico del movimiento de la teología de la liberación presidente en el mundo y el primer país con dos presidentes y dos primeros ministros simultáneamente. En el extremo opuesto, se podrían destacar muchos aspectos negativos: es el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. Pero lo cierto es que hoy la situación política de Haití es la más inextricable e imprevisible quizás de la historia del continente americano.

Frente a esta situación, la más compleja y peligrosa que ha vivido el país desde la caída de la dinastía de los Duvalier, conviene, para comprenderla mejor, primero, hacer un análisis de los nueve meses y medio de gobierno de Jean-Bertrand Aristide desde el 16 de diciembre de 1990, día en que ganó las elecciones, y ver la posición de los varios protagonistas para poder presentar las posibles perspectivas a esta crisis en función de la realidad. Es el único modo de no caer en la tendencia al lirismo y al infantilismo beato que ha caracterizado muchos acercamientos a la realidad haitiana.

El golpe

El 1° de octubre de 1991, el presidente Aristide es tomado prisionero por el ejército, firma su renuncia bajo la amenaza de las armas y es enviado al exilio en Caracas, mientras la represión hace estragos en barrios populares. El ejército, como hecho curioso, se rehusa a aceptar que se trata de un golpe de Estado y asumir el poder directamente. Prefiere mas bien presentarse como defensor del proceso democrático y de la Constitución amenazada por Aristide, presentando el general Cedras, comandante en jefe del ejército ad-interim, una lista de cargos contra el Presidente por violaciones a la Constitución.

La OEA envía a Puerto Príncipe en una primera visita una comisión que tiene por misión solicitar a los militares el regreso de Aristide. Esta comisión se reúne con ellos, quienes les solicitan que se entrevisten también con altos representantes de diferentes sectores políticos y civiles del país. En esta reunión, la comisión de la OEA tomaría conocimiento de una situación mucho más compleja de lo que aparentaba ser desde el exterior; constata que si bien los civiles no apoyan el golpe y se encuentran divididos en cuanto a la posibilidad de regreso del Presidente, todos coinciden en aceptar la veracidad de las acusaciones del ejército.

El comandante en jefe del Estado Mayor, general Cedras, convoca al Parlamento. Este se reúne y convoca al primer ministro René Preval, quien no asiste por «razones de seguridad». Lo destituyen. Declaran la vacante presidencial y nombran en base al artículo 149 de la Constitución al juez más antiguo de la Corte de Casación: el magistrado Joseph Nerette. Este nuevo Presidente provisional, conjuntamente con los presidentes de ambas Cámaras designan como primer ministro a Jean-Jacques Honorat, director de un organismo de derechos humanos, quien organiza su gabinete.

Mientras en Haití la situación tiende a una aparente normalización rápida, desde el exilio el padre Aristide, apoyado por la comunidad internacional, la OEA y la diáspora haitiana en el exterior, reclama su regreso y pide el arresto del general Cedras. La OEA decreta un embargo económico contra Haití que afecta terriblemente la economía ya en bancarota del país. Fracasan casi todas las empresas, pero el gobierno Nerette-Honorat sobrevive pese a todos los pronósticos.

Después de cinco meses de negociaciones y cuando todo parecía ya perdido, los representantes del parlamento haitiano firman en Washington, el 23 de febrero de 1992, bajo los auspicios de la OEA, un protocolo de acuerdo con Aristide en el cual se nombra un nuevo primer ministro, el dirigente comunista René Théodore y se reconoce a Aristide Presidente de la República, se declara una amnistía para todos los participantes en el golpe y perseguidos políticos del anterior gobierno entre muchos otros puntos. No se fija, sin embargo, la fecha de regreso del Presidente.

Al día siguiente, Aristide declara que ha sido forzado a firmar este documento y que el general Cedras debe ser juzgado por crímenes de derecho común. Por otra parte el presidente provisional Nerette declara que los parlamentos han firmado este protocolo ilegalmente y que es él el verdadero y único Presidente de Haití.

Amplios sectores de la población anhelan el regreso de Aristide sin poder dar respuesta a cómo podría sostenerse en el poder en semejante situación. Otros sectores, detentadores del poder económico, y los militares, se muestran totalmente opuestos a su regreso. La clase política se encuentra dividida.

Factores de la victoria

Jean-Bertrand Aristide ganó las elecciones el 16 de diciembre de 1990 como candidato del Frente Nacional por el Cambio y la Democracia (FNCD), grupo que se constituyó rápidamente antes de las elecciones y a las que se oponía hasta ese momento.

Aristide consolida su candidatura a nivel popular presentándose como opositor radical y combativo frente al peligro del duvalierismo y macutismo representados por Roger Lafontant. Este había regresado al país poco antes de las elecciones, haciendo planear la amenaza de una vuelta a la pasada dictadura apoyado por sectores del ejército, aunque sin lograr presentarse como candidato a la presidencia.

En estas circunstancias, el discurso moderado y conciliador del candidato de la ANDP, Marc Bazin, la arrogancia de Roger Lafontant y el profundo rechazo del pueblo haitiano al duvalierismo, hicieron converger hacia Aristide una amplia mayoría del electorado, particularmente desde los sectores populares. Esta situación permitió también que el discurso radical y populista de Aristide calara en la población y que su triunfo en las elecciones fuera su primera verdadera victoria.

Desde 1986 Aristide se había enfrascado en varias batallas perdidas sin apoyo popular. En 1987 pidió que el pueblo votara por el no en el referéndum por la actual Constitución y por la abstención en las elecciones abortadas por un golpe militar. Ambas contaron con participación popular masiva.

En 1990 pidió el derrocamiento de la presidenta provisional que permitió la realización de las elecciones, Ertha Pascal Trouillot, y la no participación en las mismas, hasta que dándose cuenta de que se realizarían de todos modos, decidió participar presentándose un día antes del cierre oficial de recepción de candidaturas.

Aparte de estas circunstancias particularmente favorables a su popularidad y victoria, hay que agregar otros dos ingredientes: primero el hecho de ser un cura, debido a la mentalidad mágico-religiosa de los haitianos y al sostén de la Iglesia católica, única institución que tiene una red con apoyo logístico hasta en los sectores

más recónditos del país. A pesar de ser Aristide un disidente, y de sus críticas violentas a la jerarquía de la Iglesia, ésta no se pronunció contra él. Por el contrario lo apoyó hasta a través de un organismo clave como Caritas. El segundo factor es el personaje Aristide: escapado de varios atentados sangrientos, aparece como una figura mística y mesiánica, considerándose a sí mismo como un profeta. Por su aspecto físico pequeño, muy delgado y de aspecto frágil, el pueblo se siente mucho más reflejado en él que en Bazin, por ejemplo, con su elevada estatura y fornida textura señorial.

Pero la principal arma de la victoria de Aristide fue su verbo y su capacidad de joven animador popular frente a la multitud, ejercida en sus largos años de predicador religioso. Fascinó a un país en un 70% de jóvenes. Su lenguaje florido, barroco y circular, hablando en creole al pueblo, usando muchos proverbios y expresiones populares, con parábolas y metáforas pero a la vez recurriendo a imágenes y vueltas muy rebuscadas, impresionó a los jóvenes del sector popular dándole la apariencia de un intelectual muy culto.

Todo esto lo lleva a una aplastante victoria en la que arrastra a un gran número de candidatos a los diferentes puestos electivos, desconocidos por la población e incompetentes según su propio parecer; lo que sacará él mismo a relucir meses después cuando se aleje del FNCD.

La legitimidad insurreccional

Un mes antes de la toma del poder, la noche del domingo 6 de enero de 1991, Roger Lafontant, ante la irremediable victoria de Aristide, toma como rehén a la presidenta provisional, Mme. Trouillot, la obliga a firmar su dimisión y se proclama Presidente «para salvar a la nación haitiana del peligro del comunismo».

El pueblo haitiano, simultáneamente a estos acontecimientos ocupa de manera espontánea y unánime todas las calles y carreteras del país erigiendo barricadas en llamas. Rodean el Palacio Nacional. El ejército se pronuncia contra el golpe y arresta a Lafontant y sus cómplices inmediatos. La misión de verificación de las elecciones de la ONU aún está en el país.

Pero de este golpe se derivaron unas consecuencias más sutiles, que son las conclusiones a las cuales llegaron los del grupo «Lavalas» (el cual describiremos más ampliamente en el análisis de los protagonistas), sector más cercano al Presidente que creyó ver en esta gran reacción popular una nueva legitimidad del gobierno, no ya

una «legitimidad constitucional» proveniente de las elecciones, sino mas bien una «legitimidad revolucionaria e insurreccional». Estos hechos les dieron la prueba, según sus estimaciones, de que tenían en las manos un arma invencible: los levantamientos populares y el «suplicio del caucho».

Por su parte, el ejército parecía neutralizado y sorprendido frente a esta nueva realidad. Esto llevará al grupo Lavalas más allá, a través de declaraciones del primer ministro y del ministro de Planificación, a afirmar que el pueblo reclamaba la «democracia directa» en lugar de la «democracia parlamentaria y representativa». Hacia estos objetivos concretizaban sus acciones creando la fractura entre el Ejecutivo, todas las otras instituciones y toda organización «no-lavalasiana».

El programa de gobierno

Aristide se encontraba ya, en el momento de su juramentación como Jefe de Estado, frente al problema de fondo que preocupaba principalmente a un partido político como el Partido Nacional Progresista Revolucionario Haitiano (PAN-PRA), hecho que lo impulsó a no presentar candidato propio a la presidencia, buscando un equilibrio político para este primer gobierno democrático teniendo en cuenta el problema de que la transición no dependía solamente de la toma del poder, sino de la gobernabilidad del proceso.

La Constitución haitiana, a diferencia de la de los países latinoamericanos, prevé un régimen semi-presidencial y semi-parlamentario, con un Ejecutivo bicéfalo compuesto por el Presidente de la República y el primer ministro, quien es el jefe de Gobierno. Este primer ministro debe ser la expresión del partido mayoritario en el Parlamento o, de no existir esta mayoría absoluta, el resultado de una concertación entre el Presidente de la República y los presidentes de las dos cámaras.

En el caso que nos ocupa, se asistió a la paradoja de que por un lado no existía un partido que tuviera esta mayoría, pero por otro lado el FNCD, que llevó a Aristide al poder, casi la tenía, así como la presidencia de las dos cámaras. Sin embargo no fue de sus filas que Aristide eligió a su primer ministro, sino que impuso a un personaje de cuarta línea política pero amigo íntimo e incondicional: René Préval.

El gabinete designado estuvo formado por amigos del Presidente y por ningún miembro de partido político alguno, ni siquiera del FNCD. Ahí comienza la ruptura entre el frente y el grupo que apoyó a Aristide, llamado «movimiento Lavalas». Movimiento antipartido político, formado por curas radicales, intelectuales de iz-

quierda y elementos dispersos que nunca tomaron posiciones de compromiso en las luchas del así llamado proceso de transición previo a las elecciones del '90.

El primer ministro designado por Aristide, asumió también otros dos ministerios claves: el del Interior y el de la Defensa. Su declaración de política general fue aceptada con condescendencia por los parlamentarios pues, según éstos, no indicaba en ningún campo la orientación de la política de gobierno, sino que se limitaba a una simple denuncia de la situación, por demás conocida, en la que el país se encontraba.

La clase política y los analistas percibieron como falto de ética y como un error político el que se otorgaran cargos de alto nivel a todos los miembros del Consejo Electoral, ministerios y principales embajadas.

En la práctica, el nuevo gobierno obtiene resultados positivos en lo que se refiere a la disminución de la inseguridad, en la lucha contra el tráfico de drogas y el aumento de los ingresos fiscales.

No logra suscitar una sola nueva inversión ni un nuevo empleo; por el contrario, se pierden unos ocho mil.

Pero lo más logrado y refrescante de este gobierno sucedió a nivel del protocolo y del nuevo ambiente en el Palacio Nacional. Es aquí donde verdaderamente se hace sentir que hay un nuevo equipo, con espíritu joven y un nuevo estilo, más sencillo.

Si bien el gobierno Aristide-Préval estaba lleno de buenas intenciones - no necesariamente en la vía de la democracia pluralista y representativa - no contó con el tiempo suficiente como para poner en práctica sus acciones ni, en consecuencia, para poder evaluarlas. De todos modos esto siempre hubiera resultado difícil debido a la falta de un verdadero programa, hecho que despertó fuertes críticas e inquietudes en diversos sectores, pues su ausencia no facilitaba ver en qué dirección se marchaba; lo cual permitió caer en todo tipo de especulaciones nada favorables al clima de confianza y estabilidad política necesarias para las inversiones y el despegue económico.

Partidos y movimientos

Si bien es cierto que los resultados de las elecciones dieron a Aristide una victoria aplastante frente a las otras organizaciones y partidos políticos, estas elecciones

fueron posibles, después de cinco años de lucha por la transición, gracias a aquellos y no a Aristide y su Frente. Fueron aquellos los que lograron hacer cuajar las condiciones necesarias de credibilidad en el proceso electoral frente a la comunidad internacional, quienes consiguieron así el apoyo necesario para su realización.

Estos partidos, después de la victoria de Aristide, tuvieron una actitud conciliatoria, dándole un período de gracia de tres meses, sin emitir críticas y luego otros tres con críticas moderadas y constructivas.

Esto se debió, por un lado, a que la mayoría de los políticos democráticos esperaban que el nuevo gobierno adquiriera estabilidad, y jugar entonces a la alternancia en el poder, después del período constitucional de cinco años. Por otro lado, muchos decidieron guardar el más estricto silencio por miedo a sufrir represalias o a ser linchados. Así predijo su muerte el pastor Sylvio Claude en mayo de 1991.

Para las elecciones del 16 de diciembre del 1990 habían sido aceptados 14 candidatos a la Presidencia con sus respectivos partidos, frentes o alianzas. Después de realizadas, alianzas electorales como la ANDP, con Marc Bazin como candidato, se disuelven. Queda solamente el FNCD que llevó a Aristide al poder y que estuvo conformado por muchos pequeños grupos, ninguno significativo en sí mismo, salvo el Konakom, que de todos modos pidió la abstención en las elecciones al no ser elegido su líder, Victor Benoit, como candidato, en lugar de Aristide.

Para mejor entender qué es el FNCD y el movimiento Lavalas, debemos aclarar que durante su campaña electoral, el FNCD y el padre Aristide, lanzaron un slogan: «Nosotros somos la avalancha». De ahí el término lavalas, avalancha en creole. Esta palabra sirvió, a partir de ese momento para designar a un movimiento antipartido político y básicamente anti-macoute.

Bajo este slogan, después de las elecciones algunos de los que no formaban parte del FNCD, pero que veían en Aristide a su líder, decidieron formar un nuevo movimiento que quería entonces sí convertirse en el partido del poder aislando al FNCD, con el consentimiento del Presidente, y afirmando que no tenía ninguna popularidad propia sino que habían aprovechado la de su candidato para ser electos. Esto fue cierto en no pocos casos.

En estas condiciones en la Cámara de Diputados, el FNCD y el Partido Agrícola Industrial Nacional (PAIN), de Louis Dejoie unidos, obtienen 28 escaños. Se forman al mismo tiempo: el «Bloque Parlamentario Social-Demócrata» con 20 diputados

constituido por el PANPRA de Serge Gilles y ex-independientes; el «Bloque Liberal Progresista» con 12 diputados constituido por el Movimiento para la Instauración de la Democracia en Haití (MIDH) y el Partido Demócrata Cristiano Haitiano (PDCH) de Sylvio Claude; el «Cuerpo de los Demócratas Nacionalistas» con 11 diputados, constituido por el Frente de Demócratas Nacionales Progresistas (RDNP) de Leslie Manigat y la Movilización para el Desarrollo Nacional (MNDN) de Hubert de Ronceray. Quedan fuera de estos bloques los 10 diputados de «Lavalas» y uno de la Unión para la Reconstrucción Nacional (URN) de los duvalieristas.

En el Senado el FNCD obtiene 11 escaños; el PANPRA y el MIDH, 3 cada uno; el Movimiento Lavalas 2, así como el PAIN. El Movimiento para la Reconstrucción Nacional (MRN antiguo Partido Comunista Haitiano) tiene 1, el Movimiento Nacional Patriótico 28 de Noviembre (MNP 28) de Dejean Belizaire (Presidente de la Cámara del Senadores), el PDCH, el Partido Nacional del Trabajo (PNT) y el RDNP 1 cada uno. Finalmente hay un senador independiente.

Aunque electos por un año, los presidentes de las dos cámaras, que al comienzo pertenecen ambos al FNCD, dimiten debido a la crisis después de seis meses y son electos, un dirigente del PANPRA, Duly Brutus, y el presidente del Senado, Dejean Belizaire, del MNP 28.

Duly Brutus completa su mandato teniendo la enorme tarea de defender la solución negociada a pesar de los «jusqu'aboutistes» de ambos extremos que hacen de todo por hacerla fracasar. No es reelecto, y el FNCD recupera la presidencia de la Cámara de Diputados desde enero del '92 desde cuando sigue, a pesar de las dificultades y vacilaciones, la misma política de Brutus. A cada momento de cambio de coyuntura los grupos parlamentarios se modifican, siendo el Bloque Socialista el más estable.

El Parlamento es una de las instituciones legítimas que ha sobrevivido al golpe y la que más ha sufrido. Fue tomado como rehén por militares armados desde las primeras horas del golpe. Es él quien debía legitimizar los hechos y dar una base constitucional al nuevo gobierno. Es así que se vio desgarrado al tener que escoger entre alternativas como condenar el golpe de Estado, el temor de ser aplastado por la represión y el rencor acumulado contra el gobierno derrocado que lo había humillado y amenazado con destruirlo.

Después del golpe, comienzan las negociaciones con Aristide en presencia de la OEA.

No siendo en realidad parte beligerante y no contando con ninguna fuerza coercitiva, carece del poder de aplicar, ni mucho menos imponer, a nadie ni hacer respetar un compromiso. Sin embargo, se le dejó la responsabilidad de las negociaciones.

Ambos extremos se sirven de él para ganar tiempo esperando encontrar cada uno por su lado una solución que les permita quedarse con todas las piezas del juego. Mientras tanto, el país muere de muerte lenta bajo un embargo que lo está aniquilando.

El ejército

No hay que olvidar que el actual ejército haitiano es el derivado de una historia común a muchos países latinoamericanos, aunque con muchas particularidades. Herencia de la ocupación norteamericana de 1915 a 1934, fue el verdadero detentador del poder hasta que François Duvalier lo «domesticó» a sus necesidades, haciéndolo el dócil instrumento de un autócrata civil. Para lograrlo, eliminó por diferentes medios a los cuadros superiores, los sustituyó por hombres a su servicio mientras creó un cuerpo paralelo, los tonton-macoutes, al que dio la preminencia sobre el ejército. Salvo algunos elementos del estado mayor, formados en el extranjero, su nivel de formación es muy bajo. En los tiempos de Jean-Claude Duvalier el carácter corrupto de este cuerpo se acentuó aún más con el contrabando, tráfico de drogas y otros negocios ilícitos.

Este ejército, que a su caída tratará de acaparar para sí el poder en varias oportunidades, tuvo que aceptar finalmente la realización de elecciones libres bajo la presión de los partidos políticos, sectores populares y de la comunidad internacional.

Durante el período de transición entre la caída de Duvalier y las elecciones del '90, se produjo, con cada golpe de Estado, una autodepuración de esta institución, debido a sus luchas de clanes internas en las que varios de sus jefes más conocidos cayeron o se fueron al exilio, como Namphy, Regala (éste está de regreso en Haití), Jean-Claude Paul y Avril y se disolvieron cuerpos enteros como el de Los Leopardos, dándose de baja a no pocos soldados. Todo esto contribuyó a que casi desapareciera la disciplina y el respeto a la jerarquía militar.

Después de esta depuración de los últimos cinco años, para las elecciones nos encontramos con algunos oficiales relativamente jóvenes que, dentro de este contexto político, aceptaron organizar la seguridad de la votación. Estas se realizaron, en efecto, en un clima de máxima seguridad. Entre estos jóvenes oficiales se encontra-

ban el coronel Silva y el entonces coronel Cedras, principal responsable de la seguridad de las mismas, considerados como hombres moderados y buenos profesionales.

Vista la naturaleza y el carácter de este ejército, se puede comprender que varios sectores sintieron sus intereses lesionados y amenazados por los cambios radicales que proponía Aristide y que imponía el nuevo Estado democrático, como la separación de la policía del ejército.

Por otra parte, los constituyentes, cuando redactaron la Constitución de 1987, ante el temor de que se repitiera la historia de un presidente que hace del ejército su guardia pretoriana, como sucedió con Duvalier, le dan una gran autonomía. De esta manera, varias intervenciones de Aristide en asuntos del ejército fueron consideradas por éste como extralimitaciones de su poder.

Por su lado, el mismo general Cedras, nombrado por Aristide comandante en jefe ad-interim, había superado el tiempo legal para ser reconfirmado en su cargo por tres años por el Senado y el Ejecutivo, según lo prescrito en la Constitución. Se encontraba entonces como «en suspenso» pudiendo ser destituido en cualquier momento.

En cuanto a los discursos de Aristide en los que hacía alusión al «caucho al cuello» para los macoutes y todos los que se lo merecieran, no pocos se sintieron en peligro. Su discurso, apología del «caucho al cuello» frente al Palacio Nacional, a su regreso de las Naciones Unidas y tres días antes del golpe, fue la última gota que lo desencadenó.

Después del derrocamiento el general Cedras no ha querido que el ejército continuara en primer plano. No participa en las negociaciones y declara estar dispuesto a aceptar las decisiones de los civiles. Pero de hecho, el ejército es el verdadero director de orquesta, logrando resistir al embargo y a las presiones internacionales sin pagar un precio demasiado alto.

Hoy existen varias tendencias en el seno de la institución. Una primera que se juega el todo por el todo para conservar sus privilegios. Esta siente que no podría integrarse en el marco de un régimen democrático. Una segunda que aspira a la modernización de la institución y que comprende los beneficios que podría obtener de un nuevo tipo de Estado más moderno. Una tercera que seguiría cualquiera de las dos tendencias anteriores que lograra imponerse.

Frente a la coyuntura actual, la mayoría no quiere a René Theodore como primer ministro. Habiendo sido este ejército formado en la doctrina de un anticomunismo primitivo, no logran ver a Theodore, a pesar de los cambios que se han dado en el mundo, en su partido y al apoyo abierto que le brindan los norteamericanos - hecho histórico curioso -, como otra cosa que el dirigente del Partido Comunista.

La diáspora

Aparte de las iglesias, el sector privado y la prensa, hay un sector que juega hoy un papel muy importante en la vida política nacional que es el de la diáspora haitiana, la más numerosa residente en Estados Unidos y Canadá. Bautizada por Aristide con el nombre de «El décimo departamento» (el territorio de Haití cuenta con nueve), está estimada en un millón de haitianos concentrados en su mayoría en Miami y Nueva York.

Está constituida por un grupo más antiguo, de profesionales y exilados políticos que han preferido, por razones económicas y familiares comprensibles, quedarse en el exterior. Otro grupo, el mayoritario, está compuesto por refugiados económicos clandestinos, de origen campesino, que también huían de la represión de Duvalier y que en muchos casos después de años han logrado su residencia en esos países. Todos, más o menos integrados, desarrollan un gran sentimiento crítico y de hostilidad hacia sus países de residencia y sueñan desde allí con «la revolución» para Haití.

Para muchos, Aristide se convirtió en el símbolo de esta revolución y cuanto más radicales son sus discursos tanto más lo apoyan y se movilizan para defenderlo.

La comunidad internacional

La comunidad internacional, a través de la misión de verificación de las elecciones del 1990 de las Naciones Unidas, se comprometió a fondo con el proceso democrático haitiano. Haití logró al fin entrar en el conjunto de países con gobierno civil electo democráticamente con un esfuerzo, que sin aquella, no hubiera sido posible. El presidente Aristide era percibido, por varios, como un elemento que encajaba perfectamente en el vasto cuadro naíf sobre fondo de musical vudú que representaba Haití.

La comunidad internacional percibe hoy el golpe militar como un atentado al proceso democrático, independientemente de las razones internas que lo produjeron.

Las principales naciones bailleur de fonds de Haití, Estados Unidos, Canadá y Francia, tienen dentro de sus fronteras, como ya se dijo, una importante comunidad haitiana a la que tomar en cuenta.

En cuanto a los países de la América Latina, miembros de la OEA tienen casi todos un pasado muy próximo de dictaduras militares y sus respectivos procesos democráticos son aún muy frágiles. Estos han encontrado, en el caso de Haití, país pobre, pequeño, con un ejército mal organizado y con muy pocas o inexistentes relaciones comerciales con los mismos, la ocasión de dar una «lección», muy poco costosa, a los militares de todo el continente.

Hay que recordar en este análisis, por cuanto se refiere a Estados Unidos, algunas cosas. La primera es que se comprometieron a fondo con el proceso electoral que llevó a la victoria de Aristide para poder aislar a Cuba como el último país del continente americano con una dictadura militar. Segundo, que cualquier aventura de golpe podía alentar a los sandinistas a algo semejante en el caso del actual gobierno de Violeta Chamorro. Por último, que ellos fueron los promotores de la «resolución de Santiago», por la cual todos los países de América Latina se comprometieron a unirse para evitar que cualquier golpe de Estado triunfara.

Los hechos ocurridos en Venezuela en febrero de 1992, parecen justificar, a posteriori, lo correcto de esta posición.

Es evidente además que frente al megamercado europeo y al asiático, un mercado americano que fuera de Alaska a la Tierra del Fuego, debería ser políticamente democrático en la visión de George Bush. A menos de un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos, la administración Bush debe dar una atención especial a la cuestión haitiana y a los miles de nuevos refugiados que llegan a Estados Unidos desde el golpe. Si bien el caso de Haití no es asunto prioritario, el peso de la comunidad haitiana y del electorado negro a conquistar, que simpatiza con la causa haitiana, hace que Bush, con posibilidades de ganar frente a un candidato demócrata de derecha, le otorgue un peso mayor en el momento de la toma de decisiones.

Los anti-aristidistas

Como sucede cuando una rebelión militar derroca a un gobierno populista, empieza la represión indiscriminada y la restauración. La caída de Aristide ha favorecido el regreso de todos los partidarios del antiguo régimen y de la extrema derecha

más mediocre y corrupta. Estos han recuperado los pasillos del poder y los medios de comunicación de masa.

Se asiste a una triple tentativa: a) Una restauración del statu quo, que significaría la pérdida de todas las conquistas democráticas ganadas con duras luchas desde febrero de 1986, o sea un regreso a la «piratocracia», a la toma como rehén de toda la nación por un grupo de piratas; b) La destrucción de todas las organizaciones de la sociedad civil; y c) la eliminación de toda posibilidad de realizar nuevamente verdaderas elecciones en Haití por muchísimos años. Paralelamente, la lista «de candidatos a la presidencia», aumenta cada día.

El gobierno provisional

El gobierno provisional, constituido después del derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide ha sido por un lado una criatura de los militares y por el otro, la resultante de un consenso entre una parte importante del Parlamento y de la clase política, sobre todo en lo que se refiere al primer ministro Jean-Jacques Honorat.

Se veía su designación como un mal menor habiendo sido ex-director de un centro de defensa de los derechos humanos. Algunos pensaron que él podría evitar la tradición de la vendetta política en Haití, conocida como «dechouage» y él mismo prometió evitar la «caza de brujas».

Sin embargo, desde su acceso al poder como jefe del gobierno provisional, los derechos humanos son pisoteados groseramente en las zonas rurales, barrios populares, entre los jóvenes y en la Universidad, principalmente. Los arrestos arbitrarios, intimidaciones y golpizas se multiplican. No es la represión a la Hitler, a la Pinochet o a la Francios Duvalier. Es mas bien a la Salazar.

Sin base social ni política, este Gobierno se quiso crear una propia. Para esto reintegró a la administración pública a hombres del antiguo régimen duvalierista rehaciendo lo deshecho por Préval.

La demagogia grandilocuente y la mediocridad más chata declaran la guerra a la inteligencia. La propaganda gubernamental desciende en los órganos de Estado a los niveles más bajos de la época duvalierista.

Se observa finalmente en declaraciones y discursos que es un gobierno que ha tomado el gusto del poder y que ha decidido aferrarse a él lo más que pueda y defender los intereses de quienes lo sostienen.

¿Por cuánto tiempo y a qué precio?

Previsiones finales

Después de cinco meses de medidas dilatorias y sin la voluntad de ninguna de ambas partes de llegar a una negociación que permita resolver la crisis haitiana, se firman, cuando ya todo se creía perdido, bajo los auspicios de la OEA, dos acuerdos.

El primero, del 23 de febrero de 1992 llamado «Protocolo entre el Presidente Jean-Bertrand Aristide y la Comisión Parlamentaria de Negociación, en vistas de encontrar una solución definitiva a la crisis haitiana» es un documento de cinco artículos donde se reconoce la necesidad para el Parlamento de restaurar a Jean-Bertrand Aristide en sus funciones de Presidente constitucional de Haití; se reafirman los principios de las libertades políticas; se acepta respetar las decisiones del Parlamento en estos últimos cinco meses; se proclama una amnistía general exceptuando a los criminales de derecho común; se acepta al primer ministro escogido por Jean-Bertrand Aristide y los presidentes de ambas cámaras en acuerdo anterior (René Théodore); se pide al Parlamento la ratificación de la solicitud hecha por Jean-Bertrand Aristide a la OEA del envío de una misión civil a Haití; se pide trabajar entre otros puntos por la profesionalización del ejército; se pide solicitar a la OEA una ayuda urgente y sustancial para el nuevo gobierno de consenso nacional una vez que éste se forme; se pide abstenerse de efectuar cualquier declaración equívoca que pueda ser interpretada como un llamado a la violencia; se pide rehusar y condenar cualquier intervención de fuerzas armadas extranjeras.

El segundo acuerdo, del 24 de febrero de 1992, está supeditado a la ratificación por el Parlamento del acuerdo anterior, y está firmando por Jean-Bertrand Aristide y René Théodore. Este reafirma la importancia del acuerdo precedente y la necesidad por parte del primer ministro (René Théodore) de trabajar con el Presidente electo en estrecho y común acuerdo en la formación del nuevo gobierno de consenso y de la realización de los puntos previstos en el primer acuerdo y reunirse cada 15 días en el exterior mientras se prepara el regreso del Presidente a Haití.

Estos acuerdos contienen una serie de puntos aparentemente generales y sobreen-tendidos pero que tienen cada uno de ellos su razón de ser muy precisa y una amplia significación en el contexto político haitiano.

Existen dentro de ambos grupos corrientes «ultra» que están muy descontentas, cada una por su parte, con la firma de estos acuerdos, porque consideran que se han hecho demasiadas concesiones y están haciendo todo para que no se apliquen. Las fuerzas democráticas que tienen en cuenta la realidad haitiana y las relaciones de fuerzas, están luchando por la concretización de estos acuerdos.

Es evidente que no podrá haber transición pacífica a la democracia en Haití sin un compromiso entre las diferentes fuerzas políticas, económicas y militares. Ningún poder democrático podrá mantenerse ni gobernar sin este compromiso político, sin legitimidad constitucional ni sin el sostén y apoyo de la comunidad internacional. El problema de Haití, como todo país que sale de muchos años de dictadura, no es tanto el de la toma del poder sino más bien el de la «gobernabilidad».

Esta ha sido la línea política del partido socialista democrático haitiano (PAN-PRA, miembro de la Internacional Socialista) desde antes de las elecciones de 1991 y que fue una de las pocas voces de la razón que llamaban a una solución negociada a la crisis desde los primeros días del golpe, con fuertes críticas de los «ultras».

Las alternativas para el momento en que escribimos este artículo son:

a) Que el protocolo no sea ratificado por el Parlamento o que, en el caso de serlo, el gobierno provisional apoyado por el ejército disuelva el Parlamento; en este escenario pesimista, tendríamos como consecuencias una dictadura civil o militar abierta que trataría de realizar elecciones fraudulentas dentro de pocos meses; o una posible intervención de la OEA que no podría aceptar ser totalmente burlada; y

b) que el protocolo sea ratificado, nombrado oficialmente el nuevo primer ministro y formado su gobierno. En este punto se pasaría a otra fase no menos difícil de la crisis cuyos principales escollos serían: mantener el consenso político nacional interno; poder comenzar la reconstrucción de la economía del país totalmente destruida por el embargo con la recepción de la ayuda económica urgente solicitada - lo que sabemos que no es tan fácil si pensamos en los casos de Nicaragua, Panamá y los países del Este europeo -; y el regreso al país del Presidente constitucional.

Que se realice esta última hipótesis más optimista depende del realismo y de la perspicacia política de Jean-Bertrand Aristide, de los militares y de las fuerzas democráticas haitianas.

*El presente trabajo constituye una revisión de «Los nueve meses de Aristide», análisis realizado por el autor para el ILDIS Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Caracas.